BIBLIOTECA
CENTRO LATINOAMERICANO DE
ECONOMÍA HUMANA
CLAEH

La alternativa parlamentarista

Carlos Pareja
Martín Peixoto
Romeo Pérez Antón

Gerardo Caetano (editor)

Montevideo, 1992

Centro Latinoamericano
de
Economía Humana

• Ediciones
de
Ciencias Sociales

CARLOS PAREJA

Asignaturas pendientes en el debate de la reforma política

I. Las primeras gestiones reformistas

Cuando este artículo fue escrito en su primera versión, hacia marzo de 1988, no se corría mucho riesgo de ser desmentido si uno se adelantaba a diagnosticar como malogradas las gestiones emprendidas en nuestro medio en torno a la reforma del sistema electoral y del conjunto de instituciones políticas. Saltaban a la vista entonces las huellas de los muchos errores cometidos por las “huestes” reformistas, lo que por cierto no cerraba el camino para nuevos intentos —más acertados— en esa dirección.

La empresa había empezado mal y terminado peor. Los planteos iniciales se realizaron en los últimos meses del año 1986, urgidos por la amenaza de una ruptura institucional. Se procesaron en conciliábulos partidarios —acusados posteriormente como excluyentes—, de espaldas a la opinión pública y generando a su alrededor un conjunto de malentendidos y desconfianzas que nunca se logró disipar.

Y, por cierto, más allá de esos vicios originarios, el contenido mismo de las propuestas no ayudó a configurar un debate esclarecedor. En un sistema político como el nuestro, basado en equilibrios y contrabalancesos

múltiples, dotado de diversas defensas contra las acumulaciones hegemónicas nítidas —defensas percibidas y convalidadas como garantías idóneas de una convivencia democrática pluralista—, no podía menos que resultar escandaloso que se propiciara una reforma orientada fundamentalmente a dilucidar los empates y a otorgar mandatos inequívocos a los ganadores.

Luego de haberse desencadenado las primeras tormentas y las respuestas de indignación alarmada, se trabó un debate “sucio”, poblado de confusiones, de razonamientos falaces, de respuestas mezquinas, de acusaciones recíprocas de abrigar intenciones espurias. La orfandad de argumentaciones sustantivas contrastaba con lo enredado de las tratativas entre las cúpulas partidarias, con las reservas y los condicionamientos planteados antes de empezar a desbrozar el contenido de las propuestas, con las postergaciones interminables en la agenda política, etcétera.

Más allá de la desvalorización provisoria del tema mismo, toda esa acumulación de desencuentros se tradujo inevitablemente en descrédito y deslegitimación del sistema político. Para este constituía un inexplicable despilfarro de su máximo capital de reserva: una opinión pública interesada, dispuesta a hacerse cargo de los problemas y las dificultades inherentes al ejercicio pleno de la ciudadanía.

Las enseñanzas posibles

Cumplidas algunas etapas del proceso reformista, resultó claro que el tema “no había ganado la calle” y que, más allá de las direcciones partidarias involucradas directamente, “el ciudadano común y corriente” se había desentendido del asunto. Ese dar la espalda constituía, quizás, la única forma disponible de sancionar un desempeño mediocre, un recurso extremo para disminuir los costos de deterioro del terreno de juego, distanciándose de un debate engorroso y con escasos rendimientos. A contramano de lo que muchos señalaban, no significaba desinterés ni falta de compromiso con los asuntos públicos.

No asistimos a ninguna reformulación generosa, no se perfilaron argumentaciones convincentes en favor o en contra del funcionamiento institucional vigente: tanto quienes lo defendían como quienes lo ata-

caban, salieron “perdidosos” y, con ellos, todos los que observábamos el desenlace. Si bien las críticas estuvieron mal encaminadas y no lograron identificar las deficiencias básicas de nuestro sistema político, tampoco supieron las respuestas a esas críticas destacar las mejores razones de su arraigo: al final del debate, el viejo sistema quedó en pie, más por carencia de alternativas confiables que por la exposición de sus méritos intrínsecos.

¿Era inevitable tal desenfreno frustráneo? ¿Se debe a que no existió interés genuino en trasladar el tema a la opinión pública o a que no se supo trasladarlo? ¿Qué insuficiencias hubo en la formulación de las alternativas? Y, ante todo, ¿qué motivos y exigencias reformistas, a pesar de sus desaciertos y despistes, eran susceptibles de ser rescatados y merecían ser atendidos?

Por mi parte, no tengo empacho en confesar que compartí —o, por lo menos, consideré respetable y aun beneficiosa— esa “retirada” de la ciudadanía de los planteos reformistas, el desinterés generalizado con que la opinión pública se defendió de un deterioro aún mayor, concediéndose a sí misma una especie de “moratoria”. En aquel momento consideré que mi mejor contribución a un replanteo futuro de las pretensiones reformistas no residía en intentar una respuesta a las interrogantes formuladas, sino en *establecer las premisas para un diálogo muy diferente al sustanciado*. Por tal motivo, dejando de lado el contenido específico de cada una de las propuestas y argumentaciones volcadas en la polémica, me concentré en el modelo de asociación política implícito en el diagnóstico de los presuntos vicios del sistema actual, así como en los principios “terapéuticos” a los que se apelaba.

II. Las bases para un diálogo diferente

Para no volver a empantanarse en las mismas huellas, hay que empezar por otorgar el más amplio crédito a las propuestas reformistas, dejarse interpelar por ellas, considerándolas como un empeño genuino por mejorar y dignificar el funcionamiento de las instituciones políticas uruguayas. Ello equivale a reconocer que su intencionalidad desborda en mucho

cualquier acuerdo estratégico entre grupos políticos, e incluso, que pretende algo más que meros ajustes y equilibrios funcionales, obtenibles mediante “la clarificación de las reglas del juego”.

Porque más allá de cualquier perfeccionamiento reglamentario, lo que alimenta al ejercicio maduro de la institucionalidad democrática es su vínculo con la opinión pública, con aquello que Kant llamaba “el uso público de la razón”, entendido en este caso como una instancia especializada de indagación y de aprendizaje colectivos. Y si ya podemos adelantar algún reproche genérico a aquellos planteos reformistas locales, este consiste, precisamente, en que *han descuidado la naturaleza misma de lo que está en juego en cualquier arreglo institucional democrático*.

En efecto, confiando ingenuamente en que bastaba con eliminar equívocos y bloqueos en el nivel de las reglas, estos planteos no han sabido remontarse al plano de los principios que esas reglas tratan de encarnar y tutelar. Solo los juegos de alcance más reducido pueden perfeccionarse a través de la especificación de sus reglas. Las empresas sustantivas, por el contrario, terminan siendo desvirtuadas por un ejercicio que atiende exclusivamente al orden reglamentario. En suma, dichas empresas son inseparables de una indagación acerca de sus propios principios y premisas, no terminan nunca de dilucidar las contiendas interpretativas a que dan lugar, y requieren de sus participantes un permanente rescate esclarecedor de su compromiso con ese empeño y de las razones por las cuales vale la pena asumirlo.

La asociación política y algunas exigencias a que deben someterse las propuestas reformistas

En este caso, la empresa que tenemos entre manos es, nada menos, la construcción de la ciudadanía, de la asociación política. No se trata de una asociación de afiliación voluntaria, optativa, ni puede definirse exclusivamente por los términos del contrato que liga a sus miembros. Tampoco es una mera instancia de regulación genérica que se sobrepone a la otra trama de actividades y racionalidades sociales, previamente configuradas.

Hace más de dos mil años, ya Aristóteles señalaba que la asociación

política revoca y reelabora todas las restantes formas de asociación que ligan a una población; que no es reductible a la comunidad de territorio y de lengua, a la participación en una organización de defensa contra amenazas externas comunes, ni al acatamiento a ciertas reglamentaciones de las relaciones comerciales o a determinados tribunales de administración de justicia. Por mi parte, yo añadiría que tampoco coincide con la organización estatal. El Egipto de los faraones, el Imperio Inca o el Azteca no eran asociaciones políticas, aunque disponían de un Estado y habían desarrollado una racionalidad administrativa muy sofisticada. No es mi intención extenderme sobre este punto. Me limito a afirmar que una asociación política genuina es aquella que convierte a su población en una ciudadanía, en un “cuerpo” especializado de intervenciones libres y responsables, sustraído a la gravitación de las autoridades y competencias adquiridas fuera de ese ámbito. Una ciudadanía que, por otra parte, procura basarse en el patrimonio de saberes y experiencias compartibles, para seleccionar los criterios de cuidado y administración de los asuntos de interés público.

Por cierto, esa ciudadanía es algo más que un principio atendible: se hace efectiva, se encarna, a través de una elaboración institucional, alimentada por una continuidad de búsquedas, ensayos y aprendizajes. En este sentido, con sus méritos y defectos, nuestras instituciones democráticas prolongan toda una tradición de más de 2500 años, *una auténtica empresa indagatoria*, a través de la cual los hombres han intentado ejercitar la ciudadanía, establecer los límites y las condiciones de la asociación política.

Ahora bien, si esta es la empresa en que estamos embarcados, los planteos y propuestas reformistas deben evaluarse en función de sus contribuciones a la prolongación y consolidación de dicha empresa. En primer lugar, se requiere por lo tanto poner a prueba su capacidad de diagnosticar los puntos críticos, las dificultades y los bloqueos a que está expuesto el funcionamiento de cualquier sistema político y, en particular, aquel que procura perfeccionar. En segundo término, también es indispensable medir el grado de acierto de sus orientaciones, de cara a la búsqueda de aquellos arreglos, recursos y competencias cívicas requeridos

para el funcionamiento más idóneo posible de esa “ciudadanía institucionalizada”.

Las propuestas reformistas deberían pasar, además, por un tercer control de idoneidad: están obligadas a hacerse cargo de las tensiones inherentes a cualquier proceso de reforma constitucional en un marco democrático. En efecto, cualquier proceso de reforma del sistema político plantea un dilema que no admite soluciones fáciles ni se resuelve apelando a “reglas claras”. No debe olvidarse que son los propios núcleos responsables de aquellas prácticas políticas que se quieren modificar quienes deben negociar entre sí para acordar dicha reforma.

Los riesgos del “pacto mafioso” o la ingeniería reformista

En un extremo, se corre el riesgo de que el proyecto reformista sea entendido y realizado como “un pacto de cúpulas”: frente a sus partidarios, esas cúpulas están obligadas a actuar como maximizadoras de sus logros y posiciones, lo que conducirá a acuerdos en perjuicio de los excluidos del pacto, es decir, los actores políticos incipientes, los que se formarán en el futuro y los menos organizados, con escaso poder de negociación. En otras palabras, un pacto “mafioso” entre “los que están” y contra los que pueden venir a desafiar sus posiciones. A estos últimos se les castiga multiplicando los costos de entrada al sistema de nuevas corrientes de opinión. Y atención: en política las asimetrías y las exclusiones siempre se pagan. Las corrientes de opinión excluidas “votan con los pies” todos los días, sabotean el poder legitimador de las instituciones al no sentirse vinculadas con los procesos de configuración de decisiones.

En el otro extremo, nos deslizamos hacia la “ingeniería” reformista, que hace tabla rasa, que ignora los nucleamientos disponibles de lealtades y disciplinas —por cuanto los considera el obstáculo y la rigidez a vencer—, que traza combinaciones y cruzamientos flexibles de una ciudadanía *supuestamente amorfa*. En ese caso, el proceso de reforma se interna en un aire social enrarecido, resultado de despojar al sistema político de su densidad, de su capacidad de articular *nosotros* responsables de la continuidad de cuidados y compromisos básicos con la ciudadanía. El resultado es convertir a los procedimientos de legitimación democrática

en una especie de ruleta plebiscitaria, un mecanismo sin memoria, determinado por el último impulso puntual.

¿Cómo se hace para navegar entre esos dos extremos, entre el pacto de cúpulas y la ingeniería en el vacío? Y bien, no hay recetas ni referencias preestablecidas. Se trata de asumir un trabajo lento y cuidadoso que pasa por recoger las mejores formas de ejercicio de la ciudadanía, por extraer de ellas aquello que puede servir de base para privilegiar procesamientos responsables de la opinión pública, por tener en cuenta las necesidades diferenciales de representación y de integración de grupos sociales, cuyas posibilidades de “voz” y de gestión cívica son muy dispares, etcétera.

En resumen, se trata de multiplicar las garantías y los dispositivos para eliminar las exclusiones, ese riesgo intrínseco que amenaza por dentro a la “asociación política”. Para que lo anterior sea posible, es necesario que el proceso reformista *se haga cargo de todas las desconfianzas y temores* al respecto, que sea capaz de superarlas mediante una interlocución amplia y sostenida con las diversas corrientes de opinión.

No postulo que el cumplimiento de todos esos requisitos garantice el resultado: siempre puede haber sectores que se automarginen. De lo que se trata es de generar un clima de opinión tal que, en función de él, los que se van tengan que pagar un costo muy alto, en vez de ser ellos quienes desacrediten desde afuera al proceso reformista. Además, existen otras voces políticas, no institucionalizadas como tales, que, a pesar de tener un compromiso y una lealtad muy menguados con respecto al sistema político, igual opinan “desde afuera” y con toda “impunidad”. Es necesario que no disfruten de esa condición privilegiada, que exista alguna instancia de interlocución en la cual deban argumentar sus posiciones —aunque sea sobre unos pocos puntos de interés— y hacerse cargo de las críticas que ellas levantan frente a un escenario público.

Un diagnóstico desacertado

Ya tenemos instalado el tribunal de idoneidad de los planteos reformistas. ¿Cuál sería su fallo? A mi juicio, por más benévolo que fuera dicho tribunal, al aplicar los criterios adelantados, su conclusión sería terminante: los planteos realizados hasta el momento no se han hecho cargo de

las exigencias de legitimación que tensionan el desempeño de una asociación política, ni han garantizado la reproducción de aquellas premisas y competencias cívicas que la habilitan para producir decisiones vinculantes para sus miembros. Más aun, dichos planteos no han tenido en cuenta el rol primordial de las mediaciones partidarias como articuladoras de núcleos de ciudadanía responsables. No es de extrañar, pues, que hayan fracasado en encontrar un nivel de interlocuciones que interese a la opinión pública, que la invite a debatir sus propuestas y la estimule a aportar nuevas sugerencias y enfoques.

En la raíz de ese desencuentro que creo percibir entre los planteos reformistas y la opinión pública, es necesario ubicar un malentendido inicial: incluso los más sobrios y mejor intencionados de esos planteos han tratado de convencer a la ciudadanía de que los artilugios del sistema vigente confunden y atrapan a la gente, distorsionando de diversas formas los pronunciamientos de su voluntad política. Y eso se supone probado más allá de toda duda. He aquí el primer desencuentro.

No será fácil convencerme y —lo que resulta un principio mucho más relevante— convencer a grandes sectores de la ciudadanía, de que votamos confundidos por los complejos mecanismos electorales. Lo más probable es que el ciudadano los use sabiendo sus alcances y, en todo caso, aceptando de antemano el conjunto de mediaciones y agregaciones que ellos posibilitan. Más aun, probablemente piensa que la configuración de voluntades políticas de la ciudadanía es un asunto mucho más complicado que el modo simplista con que suelen presentarlo los reformistas.

Por lo menos, no hay indicios de que comparta algunas ingenuidades de los reformistas vernáculos: por ejemplo, la de creer que la legitimación de un mandato político se dilucida apelando a presuntas transparencias de una igualmente presunta voluntad inequívoca; o que sus vicios se neutralizan recurriendo a expedientes tan elementales como la flexibilización de las trabas o la eliminación de las ambigüedades.

A partir de ese primer desencuentro, el enfoque y los supuestos del “reformismo vernáculo” se encabalgan con toda una teoría social, con una forma peculiar de analizar y evaluar las instalaciones y los desempeños de la ciudadanía. Ese enfoque, por lo pronto, empieza dando la espalda a toda la reflexión y a la mejor tradición politológica, y termina

desconociendo la especificidad de las adhesiones y las competencias cívico-partidarias al leerlas en claves ajenas: sociológicas, económicas e incluso jurídicas.

III. Una reflexión crítica sobre el modelo de asociación política en los planteos reformistas

A continuación, buscaré desentrañar el modelo de asociación política que está presente como referencia implícita en los diagnósticos reformistas sobre los bloqueos del sistema y en sus propuestas terapéuticas. Seguramente extremaré algunos perfiles, por lo que pido excusas de antemano. No pretendo atribuir a esos planteos una afiliación incondicional a tales modelos. Sólo pretendo ilustrar cómo es posible quedar atrapado en un universo de pensamiento al dejar de lado ciertos problemas y al no conceder suficiente importancia a ciertas dimensiones.

Advierto la presencia de ese universo de pensamiento en los dos núcleos centrales del planteo reformista: a) en el diagnóstico del sistema institucional vigente, en cuanto “permite un funcionamiento distorsionante de la voluntad popular”; b) en los argumentos utilizados para demostrar la “necesidad de una reforma que habilite mayorías para el gobierno” y en los criterios que presiden la búsqueda de fórmulas que garanticen tales mayorías.

A mi juicio, no solo hay una continuidad profunda en los criterios manejados en relación con los dos núcleos, sino que esa misma continuidad perfila nítidamente el *modelo implícito de asociación política* que articula todo el razonamiento. Sus rasgos superficiales serían los siguientes:

1. Interpretación del respaldo político como expresión unívoca y permanente, definida, de la voluntad inicial del elector.
2. Visualización del voto como una especie de nexo personal entre el ciudadano y sus representantes.
3. Desvalorización sistemática, o por lo menos, desconfianza con respecto al papel que juegan los partidos políticos como canalizadores de la voluntad política. Acusarlos de “encuadrar rígidamen-

te al elector” lleva aguas al molino de las concepciones plebiscitarias de la legitimación democrática.

4. Preocupación obsesiva por “clarificar” las reglas del juego, por eliminar ambigüedades, en desmedro de la preservación de los principios más sustantivos.
5. Recurso desmedido a la regla de la mayoría como criterio exclusivo de legitimación democrática. Esto trae como consecuencia una peligrosa secundarización de otras exigencias decisivas concernientes a esa misma legitimación.

En esta óptica, parece perder relevancia el debate previo a cualquier votación, la obligación de agotar todas las etapas requeridas para acoger todas las opiniones, de rescatar todas las pretensiones y criterios genuinamente arraigados en los distintos núcleos de ciudadanos. Se olvida, también, la necesidad de dar garantías especiales y compensatorias a aquellos núcleos que no logran hacer primar sus criterios en el momento del recuento de votos, a cualquier nivel.

Todas estas piezas encajan en ese modelo de asociación política, lo que trataremos de probar inmediatamente. Descuento, sin embargo, que en la mayoría de los casos, los rasgos apuntados traicionan las mejores convicciones reformistas, en la medida en que estas se perfilan menos como el resultado de reflexiones maduras y más por omisiones y descuidos.

1. El voto y el sistema electoral

¿Qué comunica el voto, qué mandatos indica?

En el análisis reformista del sistema electoral se tiende a aislar la instancia del voto del proceso más amplio del que forma parte: configuraciones de opiniones y lealtades político-partidarias, elaboración y selección de alternativas de gestión, actuación constante de las mediaciones partidarias, auscultando y tratando de orientar a la opinión pública durante todo el período intercomicial. Dicho de otra manera, se considera a los pronunciamientos electorales como una instancia privilegiada de la que habría de surgir un mandato *transparente y unívoco*.

En contrapartida, tiendo a visualizar el comicio como la instancia con

arreglo a la cual ciertos perfiles de gestión y ejercicio de la ciudadanía reciben *un conjunto de cartas de crédito*. El ciudadano conoce de antemano las limitaciones de recursos disponibles para reembolsar esos créditos; acepta que dicho reembolso —los desempeños de los gobernantes y los representantes elegidos— estará condicionado por una compleja dinámica interpartidaria y, sobre todo, sabe que tendrá que otorgar un amplio margen para la reformulación y reajuste de las orientaciones anticipadas en la campaña electoral.

Los reformistas denuncian con frecuencia los complejos mecanismos acumulativos del régimen vigente. A su juicio, estos mecanismos terminan distorsionando las opciones del votante. Yo podría acompañarlos en ese esfuerzo por mejorar las modalidades de acumulación. Lo que no puedo imaginarme, sin embargo, es la existencia de un sistema político maduro que no establezca niveles jerarquizados de opciones, o que no combine mandatos con respaldo popular directamente marcado en el momento del pronunciamiento electoral, con mandatos que representen la continuidad de orientaciones de los núcleos partidarios.

Por lo mismo, no puedo aceptar que el grado de representatividad de un sistema político sea explicado sobre la base exclusiva de los resultados electorales. Sería como explicar el estado de salud de un enfermo recurriendo solamente a registros y gráficos de sus datos vitales. Dicho de otra manera, creo que estas discrepancias se originan en el distinto alcance que cabe otorgar al acto de votar. Mientras a este respecto estemos pensando en cosas diferentes, nuestras evaluaciones no encontrarán un terreno común de dilucidación.

Afirmo que *el voto es algo más que ese acto puntual que realiza cada ciudadano por su cuenta*, expresando sus preferencias personales. Ese *algo más* tiene que ver, entre otras cosas, con la configuración del voto como respuesta a un conjunto de preguntas y alternativas que el sistema político plantea a la ciudadanía, demandando una serie de respaldos discriminados que se sumarán de acuerdo a las reglas establecidas por la propia forma de hacer la pregunta, es decir por el sistema electoral. Si alguien pretende agrupar los respaldos en función de cualquier otra regla sumatoria, lo único que está haciendo es tratar de establecer qué pasaría si las preguntas y las alternativas hubieran sido diferentes.

Así, cuando se dice respecto del sistema electoral vigente, “que probadamente ha ido alejando la voluntad del elector del resultado final”, se está asumiendo un riesgo nada despreciable: dar por probado que existe una distancia entre una entidad algo “fantasmal” —la supuesta *voluntad genuina del elector* (abstraída de las combinaciones y arreglos a los que se presta la ciudadanía en el marco del sistema vigente)— y el resultado final, determinado, precisamente, por todas esas acumulaciones con las que el sistema político pretende (con mecanismos perfectibles, por supuesto) dar continuidad y espesor responsable de memoria a la voluntad política del cuerpo cívico.

Las dificultades para dilucidar méritos y defectos de un sistema electoral

Me apresuro a aclarar que no pretendo descalificar las dudas planteadas sobre la “confiabilidad” del sistema electoral uruguayo, en lo que concierne a su capacidad para traducir la voluntad política de la ciudadanía. Tengo claro, sin embargo, que: 1) no existe una traducción correcta, entendida como aquella voluntad depurada de ambigüedades; 2) es imposible probar la “distancia” entre el supuesto texto originario y su traducción, mucho más recurriendo exclusivamente a resultados electorales.

Esto no quiere decir que no haya ninguna posibilidad de dilucidar racionalmente los méritos y defectos de un sistema electoral. Sucede que no disponemos de ningún “termómetro” capaz de proporcionarnos una respuesta directa a la cuestión. Sucede, además, que no podemos —no debemos— recurrir a ningún otro método “perezoso”, y que estamos obligados a estudiar detenidamente los vínculos intrincados entre los distintos procedimientos para ordenar, jerarquizar y acumular los respaldos, por un lado, y los desempeños de los correspondientes sistemas políticos, por el otro.

El asunto es todavía más complejo. Es necesario dar entrada al sistema institucional y a la cultura política disponible en cada contexto, establecer rendimientos comparativos, sin caer en el casuismo ni en generalizaciones apresuradas, que luego hay que ajustar *ad hoc*. Se trata sin duda de un largo camino.

La articulación de las lealtades más permanentes con las opciones individuales y circunstanciales

Mientras tanto, podemos evaluar la confiabilidad de los procedimientos electorales, manejándonos con aproximaciones cautelosas y argumentaciones razonables, lo más cercanas posible a la experiencia del ciudadano común. Eso sí: habremos de partir siempre del axioma según el cual, *el mapa no es el territorio*. ¿Qué quiere decir esto? Por de pronto, que es imprescindible asumir que todo sistema de representación política se propone ofrecer algo más que un mapa fiel de la dispersión de opciones políticas individuales. Asimismo, que en él se procura siempre —ese es el *principio del juego*, más allá de sus reglas mejorables— *detectar y canalizar corrientes no transitorias de opiniones y lealtades*, a la vez que dar lugar a las preferencias emergentes en cada instancia electoral, como señales de nucleamientos incipientes y de apuestas de renovación de los estilos de gestión.

Para conjugar todas esas “representaciones” es necesario someter la dispersión de opciones individuales a ciertos “filtros y canales”, establecer niveles jerarquizados de alternativas. Sólo así el sistema político realizará aprendizajes no erráticos ni puntuales y podrá ejercitar un seguimiento sistemático de desempeños. Sólo así también estará en condiciones de cotejar las distintas orientaciones como programas de investigación de largo alcance, a los que se les otorga ciertas chances controladas de demostrar sus rendimientos o a los que se mantiene como reservas de competencias y voces genuinas.

En las comparaciones, el sistema electoral uruguayo no sale mal parado

En el marco del sistema electoral uruguayo, se invita al ciudadano a dilucidar con su voto una serie completa de alternativas “cruzadas” entre sí. En este caso, los filtros y canalizaciones se caracterizan por yuxtaponer en un mismo pronunciamiento las “primarias”, internas a los partidos, y las elecciones “generales” de los cargos disputados. Es posible rastrear múltiples fuentes de equívocos en esa yuxtaposición, pero más que alinearme en el bando de sus defensores o en el de sus detractores, me interesan las buenas razones en uno u otro sentido.

Debe reconocerse, en primer lugar, que los peculiares procedimientos acumulativos del sistema electoral uruguayo apuntan, a su manera, a minimizar las exclusiones. Al legitimar ciertas “modalidades desmonopolizadoras de la representación política” se permite, en efecto, que grupos pequeños de ciudadanos se incorporen a la disputa por el respaldo de la opinión pública sin hacerles pagar un alto costo de iniciación. De este modo, el sistema estimula a dar los primeros pasos en la política en ámbitos reducidos, portadores de experiencias “directas y familiares” de gestión cívica. Eso constituye, de por sí, un expediente válido para carreras políticas abiertas y relativamente independientes de las estructuras partidarias.

Un recorrido superficial de cualquiera de aquellos sistemas políticos que han logrado consolidar una institucionalidad democrática, nos muestra un panorama variado de procedimientos electorales de “filtro y canalización”, coincidentes en el desaliento al “voto suelto” de mero desahogo (el triunfo electoral del rinoceronte Cacareco en San Pablo o de la Cicciolina en Italia). También en ellos se resiste a su contrapartida, el diletante de la política, el que acude a ella y solicita el respaldo de la ciudadanía por un afán espurio, sin disposiciones reales o eficaces para ver y oír a la gente, para pulsar sus cuerdas cívicas.

Evaluado con esos criterios, el sistema político uruguayo no queda mal parado. No está entre los mejores, pero supera a muchos de sus colegas. Ha logrado convocar y socializar a la inmensa mayoría de la población; ha generado una multiplicidad de instancias de reclamo y de gestión —más eficaces, eso sí, por su poder de veto que por su capacidad para ejercer iniciativas—; recluta mediadores vocacionales y generalmente honestos, en vez de advenedizos o figuras prestigiadas en otras esferas; etcétera.

Enumerar sus méritos no significa atribuirle eficacia en su gestión de cara a los problemas de la sociedad uruguayo. Pero, pretender relacionar los pobres desempeños de los gobiernos con ciertos vicios intrínsecos al sistema político, y luego explicar dichos vicios como resultado de un supuesto distanciamiento de la opinión pública con respecto a sus representantes, implica querer saltar por encima de abismos que ni la imaginación más desbocada visualizaría como franqueables. Tales saltos supo-

nen validar lo invalidable, en el plano del razonamiento: validar argumentos tales como que la sola representación fiel de la voluntad de la ciudadanía daría lugar a gestiones superiores, por cuanto en dicha opinión y voluntad residirían todas las fórmulas para la resolución de todos los problemas.

En distintos seminarios, Romeo Pérez y yo hemos defendido la tesis según la cual nuestro sistema político es fiel a la trama de consensos normativos que opera en la sociedad uruguayo. Al mismo tiempo que desestimula las aventuras extremas, los mesianismos y las patriadas, también premia la mediocridad, la excesiva sensatez, castiga la innovación y el riesgo. Pero estos costos mal pueden ser atribuidos a un sistema político que funcionaría de espaldas a la ciudadanía. Antes bien, a nuestro juicio, son la contrapartida de un exceso de representatividad, de una multiplicación de actores sociales y políticos bien informados, con capacidad de convocatoria ganada en buena ley.

A menudo, en algunos planteos reformistas suele interpretarse el golpe de Estado de 1973 como una suerte de “castigo ineludible” por el presunto desconocimiento de la voluntad popular que habría practicado, por entonces, el sistema electoral vigente. De acuerdo a ese razonamiento, si dicho sistema electoral “formaba parte del deteriorado andamiaje institucional que se desmoronó definitivamente (sic) el 27 de junio de 1973”, entonces hay que leer esa quiebra como una sanción indirecta a la deslegitimación provocada por el recurso a “laberínticos procesos electorales”.

Al razonar así, se olvida que tales “laberintos” fueron utilizados durante varias décadas y que estuvieron asociados a gestiones gubernamentales regulares, buenas y malas. Y además, ¿qué propiedad intrínseca del sistema político permite abrigar la peregrina hipótesis de que, si los representantes del pueblo hubieran contado con el máximo de respaldo electoral exigible por el mecanismo electoral menos ambiguo imaginable, entonces no solo se habría logrado una expresión más esclarecida de las corrientes de opinión disponibles en la sociedad uruguayo, sino que el *desempeño* del elenco político habría evitado el deterioro del andamiaje institucional?

2. El papel de los partidos

Reformular el problema y aportar al debate razones y principios antes que meras reglas de juego y procedimientos

La polémica en cuanto a las bondades y los defectos de un sistema electoral no lleva a ningún lado si se la pretende procesar al margen de la forma de gobierno asociada a ese sistema, al margen de la índole de los cargos y mandatos que resultan legitimados por ese arbitraje comicial. Los planteos reformistas eluden, en este campo, la discusión de un serio problema: en Uruguay, la puja por la Presidencia y el rol institucional del jefe de Estado, embretan a todo el sistema político y estimulan un sesgo plebiscitario, al polarizar votos “oportunistas” en torno a ese cargo estratégico, en desmedro de adhesiones políticas más maduras. Por el contrario, en un régimen parlamentarista, las peores ambigüedades de los procedimientos acumulativos vigentes se neutralizan por sí solas, en virtud de un seguimiento diferente de la gestión de los representantes.

No es ningún capricho mi insistencia en las razones: son estas las que permiten perfilar una propuesta. A nivel de las reglas y de los procedimientos pueden obtenerse acuerdos tan fáciles como engañosos, detrás de los cuales se escondan no solo profundas discrepancias, sino también adhesiones desleales, adoptadas con reservas estratégicas. Es en el nivel de las razones que quiero situar la discusión. A ese respecto, quiero insistir en que *no son las reglas de juego lo que me preocupa: son las concepciones acerca de lo que hacemos los ciudadanos cuando nos constituimos en un cuerpo político*. En esa perspectiva, se adopta un sesgo contractualista cuando se concibe al voto como “un nexo casi personal entre el ciudadano y su representante”, y cuando se denuncia la trama de mediaciones partidarias como responsable de “hacer más difusa, más débil en su convicción, la relación entre el ciudadano y el sistema democrático”.

Llevada al extremo, esa concepción del asunto tiende a aislar al ciudadano, a considerar cada voto como una especie de contrato personal entre el mandante y el mandado y a evaluar el sistema político como una sumatoria de múltiples contratos, de los que deben eliminarse “futuras ambigüedades mediante cláusulas claras y estrictas”.

La tendencia contractualista en las propuestas en torno a “reglas de juego claras”

Se podrá decir que estoy exagerando y descubriendo toda una metafísica social en lo que no pretende ser más que una referencia llana. Lo que sucede es bien sencillo: buscando argumentos para criticar los “vicios” de los mecanismos vigentes de acumulación de respaldo, los reformistas terminan denunciándolos como una traición a la voluntad inicial del elector y, por lo tanto, encarando al voto en términos de un contrato, asumiendo —advertidamente o no— una concepción contractualista.

Llevando esa concepción a sus últimas consecuencias y haciendo énfasis en la supuesta *voluntad inicial* del votante, se pueden justificar actitudes tales como la descalificación liberal de las instancias gremiales. En efecto, ellas aparecerían como un elemento de distorsión de las contrataciones libres entre agentes aislados. En suma: aceptado este enfoque no quedan muchos recursos argumentales para distanciarse de una filosofía social atomista. Con arreglo a esta, la *única y más genuina* expresión de la voluntad humana es aquella que se configura al nivel de cada individuo como “una unidad” aislada, es decir, actuando por su propia cuenta y riesgo.

Estoy muy lejos de desconocer la validez específica de las instancias individuales de elección y asunción de responsabilidades, así como de su complemento, la posibilidad de apelar a la opinión de un *público no organizado*, no sujeto por lealtades grupales incondicionales. Sin embargo, se tendrá que aceptar que el proceso de legitimación democrática de un desempeño político es algo más que un conjunto de encuestas y de plebiscitos de adhesión puntual. Deberá aceptarse, al menos, que junto a esas “adhesiones independientes”, y con igual peso representativo, se configuran *adhesiones más comprometidas, negociadas a nivel grupal*.

Trabajemos sobre un ejemplo. Cuando los reformistas se refieren —despectivamente— a esa “maraña de cooperativas electorales”, se olvidan de que para muchos ciudadanos no tiene ningún sentido “votar por su cuenta y riesgo”. En realidad, ellos votan identificándose con algún grupo conocido de co-electores, marcando distancias y proximidades

con otros grupos políticos. Los 800 “amigos” del caudillo o gestor Fulánez —por lo general acompañados u “orientados” por cinco o seis subcaudillos— constituyen una agrupación político-partidaria que “negocia” su lugar en el escenario político, estableciendo una red de alianzas en las que figuran, a su vez, los 1.300 seguidores del gestor Mengáñez, participando así de una compleja red de oposiciones y disputas con otros grupos similares. Y esa es solo una mínima parte de la intrincada trama de mediaciones partidarias a través de la cual, la sociedad “se pone en forma” a sí misma para expresarse políticamente, apoyándose en sus experiencias directas de gestión colectiva.

Toda esa dimensión “agrupativa” y negociadora en la configuración de los respaldos políticos se presta a cualquier tipo de desvirtuaciones y condicionamientos espurios. ¿Cómo oponerse a ello? ¿Cómo neutralizar esos vicios? En primer lugar, no es posible oponer al modelo cuestionado, otro que resultaría una especie de “encuesta domiciliaria” en la que cada individuo (una suerte de “ciudadano de probeta”) eligiera sus propios representantes como quien elige el color de su corbata. Por otro lado, ninguna reglamentación electoral —por más claras y unívocas que sean sus cláusulas— nos pone a salvo de las peores formas de condicionamiento a las adhesiones. Al fin y al cabo, la democracia solo puede renovarse y perfeccionarse ejercitando sus músculos al aire libre de la vida pública. Solo mediante esos aprendizajes colectivos la democracia construye los *nosotros* y obtiene los recursos genuinos para discriminar entre los diferentes estilos de representación cívica.

En este juego, ¿qué papel hacen los partidos políticos?

¿Los malos de la película?

Resulta fácil encontrar en la “literatura reformista vernácula” múltiples ejemplos que ilustran cómo se deja de lado, o simplemente se descalifica, esa dimensión asociativa de los pronunciamientos electorales. En efecto, las críticas al sistema electoral vigente se centran en “*su falta de respeto por la voluntad o la preferencia inicial del votante*” y en que sus reglas de procesamiento de esas preferencias *lesionan el nexo personal que el ciudadano tiene con su representante*. Como contrapartida, los reformistas suelen proponer el establecimiento de reglas depuradas de ambigü-

dades y un vínculo personal resultante de “*lo que el ciudadano quiso en el momento de votar*”.

Ahora bien, ¿dónde están los partidos políticos en este juego? No figuran. Más aún, cuando lo hacen, ingresan para actuar como los malos de la película, como los obstáculos a los que el héroe debe vencer: “un deseo popular que va más allá de los rígidos encuadramientos partidarios” es la expresión “comodín” en la cual a menudo se condensan las expectativas reformistas en torno a un saneamiento “milagroso” de los mandatos políticos.

Me adelanto a conceder que traiciono el pensamiento reformista. En otro contexto no dudo que se reconocería expresamente el papel positivo que cumplen esas mediaciones partidarias. Pero, es precisamente la *unilateralidad del contexto* en que se ubican lo que, seguramente, los arrastra a todas esas omisiones, aun a riesgo de incurrir en desvíos sistemáticos. Al fin quedan atrapados en una concepción de la política que visualiza los procedimientos de legitimación democrática según un modelo transparente de transacciones capaces de procesar (sin ambigüedades) las preferencias individuales de los votantes. En ella, los partidos políticos no tienen lugar o encajan forzosamente. En efecto, una vez que el razonamiento se elabora sobre un punto de vista dominante y excluyente —*el actor individual* y sus mandatos casi puntuales—, termina resultando inevitable que los encuadramientos partidarios —con toda su complejidad— aparezcan como artilugios generadores de distorsiones.

3. Sobre las mayorías y minorías

Todavía nos queda desatar otro nudo en los planteos reformistas: el problema de la conformación de las mayorías habilitadas para gobernar y el papel de las minorías; cómo se gana en ese juego y cómo se legitima el resultado, asegurando su acatamiento. Si estoy en la pista correcta, espero demostrar cómo se completa aquí la extraña versión contractualista implícita en dichos planteos: *un modelo de asociación política incapaz de rescatar los principios de su propia reproducción*.

Para avanzar juntos en este terreno, propongo borrar la pizarra y empezar de nuevo. De ese modo, en vez de jugar a la “ingeniería institu-

cional”, a los acuerdos reglamentarios y a los pactos de cúpula, nos ubicaremos en el único terreno en el que, a nuestro juicio, resulta posible dilucidar estos asuntos: el de la filosofía política. En él nos preguntaremos sobre la sustancia del juego institucional al que pretendemos mejorar.

Comencemos por identificar los puntos de apoyo relativos a la configuración de una institucionalidad democrática capaz de:

1. ... servir de foro sensible y vigilante a los reclamos de la ciudadanía; recoger los ecos de la opinión pública en todas sus formas y modalidades, en particular, rescatando las voces menos articuladas y con menor respaldo organizativo.
2. ... procesar esos reclamos y voces mediante debates y confrontaciones esclarecedores, en los que se replantean y reformulan los problemas, intentando hacerse cargo de la trama colectiva de vida y de bienes generales y particulares que allí están entretejidos. Debates, en suma, donde se vuelvan visibles los costos y responsabilidades implícitos en cualquier demanda o aporte societario.
3. ... procesar decisiones a través de argumentaciones que agoten todas las oportunidades de convencer, de ampliar consensos, antes de recurrir al conteo reglamentario de los respaldos mayoritarios, extremando los recaudos y las garantías especiales para integrar también aquellas pretensiones que no son atendidas en la decisión final. Con esto se procura que tales decisiones resulten vinculantes para toda la ciudadanía, reproduciendo las lealtades y *confiabilidades* básicas de la asociación política.

De cara a esos “principios” y “metas” del juego democrático, todo lo demás, es decir las distintas fórmulas institucionales, los procedimientos electorales y todo el resto del andamiaje reglamentario no son más que instrumentos auxiliares. Podemos ensayarlos, descartarlos y corregirlos en función de sus contribuciones a la consolidación y el esclarecimiento de esa empresa en marcha que es la asociación política, al perfeccionamiento de nuestra cultura y competencias cívicas. Por el contrario, desvinculados de esos principios y metas, todas las reglas y recursos institucionales se convierten en rituales vaciados, incapaces de generar lealtades, disciplinas y cultura democráticas.

No debe extremarse el recurso a la mayoría

De acuerdo a los planteos y argumentaciones habituales, la reforma constitucional sería necesaria para *habilitar mayorías que ejerzan el gobierno en base a respaldos más amplios*. Asimismo, ella ayudaría a que los procedimientos y las decisiones resultantes fueran aceptados “lealmente” como *una regla que vale tanto para los ganadores como para los perdedores de ese juego de obtención de mayorías legitimantes*. Analicemos estos dos puntos.

Por lo pronto, dentro de una convivencia democrática, la apelación a la regla de las mayorías —como instancia de arbitraje de las divergencias de opinión— está sujeta a un número importante de restricciones y reservas. Es así, aunque ninguna Constitución lo diga con todas las letras.

Una aplicación reiterada de la regla de mayoría, invocada de antemano como el único tribunal válido, deteriora inevitablemente la *capacidad integradora* del proceso democrático. La mera aplicación mecánica de la regla de mayoría iría así a contrapelo de su virtud específica, que consiste en reconstruir los vínculos sociales —luego de disolverlos en la constitución de la ciudadanía— a un nivel superior al de la mera tolerancia recíproca, al del mero acatamiento a las reglas establecidas o al simple acuerdo contractual entre partes que llevan “contabilidades separadas”.

Comprender esto es decisivo. Esta pauta básica que recomienda un uso restringido del recurso a la mayoría debe convivir, en una apasionante tensión de colegitimación, con su opuesto, el arbitraje de diferendos por la mayoría. Por lo general, los reformistas —en contrapartida— construyen un modelo en el que se asocia el “contractualismo” del voto con el énfasis puesto en la regla de las mayorías.

Me resulta claro, también, que actuar sin esa restricción general decisiva, aplicando el mero recurso mayoritario y pretendiendo que las decisiones tomadas sean consideradas como decisión del cuerpo cívico, corre el riesgo de desdibujar los perfiles que separan una comunidad democrática de un sistema totalitario. Nada cuesta pensar a Hitler o Stalin gobernando cómodamente con una institucionalidad “democrática” en base a la legitimación mayoritaria.

He aquí las limitaciones que supone el énfasis en los aspectos regla-

mentarios, en “las reglas del juego”. Al reflexionar sobre estos límites, tengo la intención de subrayar cómo todos estamos invitados a encarar en su complejidad el alcance de los compromisos que debemos asumir al prestarnos lealmente —sin reservas estratégicas— al juego de la democracia. Se trata, sin duda, de compromisos mucho más exigentes y difíciles de cumplir que el de acatar el resultado que designa, en cada caso, al ganador del juego.

La democracia no es la mera disputa por el poder mediante métodos pacíficos y arbitrajes electorales

No puedo detenerme a explicitar todos esos compromisos. No está de más, empero, despejar algunos equívocos elementales. La democracia no es meramente una disputa por *el poder*, mediante métodos pacíficos y arbitrajes electorales. Tampoco un habilidoso artilugio para la circulación de elites, en competencia entre sí, y para su autocapacitación a través de la disputa por la adhesión de las mayorías. Dicho de otra manera, si las instituciones democráticas se limitaran a cumplir ese papel, su resultado no merecería más que un pobre reconocimiento. Habrían fracasado en brindarnos el tipo de logros que exigíamos de ellas, a saber: *neutralizar* las premisas privatizadas de ejercicio de autoridad sobre los ciudadanos; evitar que los grupos tentados de someter a la ciudadanía a regímenes de rehenes y chantajes tengan posibilidades de éxito en tales prácticas; *disolver* cualquier base de detentación de poderes diferenciales, obtenidos al margen de la asociación política; configurar a esta asociación como un nuevo *nosotros*, que apuesta siempre a “*barajar y dar de nuevo*”, renunciando a cualquier acumulación asimétrica del poder social, salvo aquella imprescindible para asegurar a la ciudadanía el ejercicio libre, exento de condicionamientos y amenazas, regulado en base al procesamiento argumentativo de los asuntos comunes.

Hubiera sido ocioso reiterar estas cosas archisabidas, si no fuera porque en nuestro medio han sido olvidadas o nadie se anima a invocarlas. En efecto, ¿cuántos grupos políticos descalifican la institucionalidad democrática elaborada por nuestra tradición, endilgándole falta de idoneidad para sustanciar la voluntad genuina de la sociedad? ¿Cuántos grupos ensalzan modalidades de organización institucional —“democracias in-

tegrales”, “democracias populares”, etc.— distantes de la convivencia democrática?

En síntesis: no desconozco que los mejores planteos reformistas se preocupan de desautorizar expresamente las pretensiones de constituir mayorías irreversibles, de eludir el juego de alternancias, de considerar los respaldos propios como opiniones sanas y maduras y los contrarios como edificados sobre resistencias al cambio, ignorancia, miedo, etc. Pero sucede que toda esa argumentación carece de recursos capaces de permitirles tomar distancia de los planteos reñidos con el juego democrático. Toda vez que se admite ese privilegio unilateral a la regla de la mayoría y que se comparte el diagnóstico reformista según el cual el sistema actual traiciona la voluntad popular, uno se entrega atado de pies y manos a las versiones plebiscitarias de la democracia. Por lo mismo, se encuentra imposibilitado de resolver el problema fundamental de la legitimación: *cómo y sobre qué bases los perdedores aceptan lealmente el resultado de los arbitrajes y no se dedican a sabotearlo oblicuamente.*

El carácter del vínculo democrático

He insistido en estos aspectos en la medida en que la argumentación corriente incurre, inadvertidamente, en sistemáticos desvíos “contractualistas”. Se alimentan así desmedidas expectativas acerca de las virtudes de los “acuerdos procesales”. Dichos acuerdos son operativos cuando el contenido y el alcance de las actividades reguladas por ellos no da lugar a dudas ni a pretensiones conflictivas. Solo funcionan cuando se trata, por ejemplo, de fundar un club de bochas o aun de algo más complejo como ordenar un conjunto de prácticas mercantiles. En términos generales, sirven para todos aquellos casos en que lo que “está en juego” admite ser tratado en términos de una racionalidad social acotada. Participar en una actividad de esta índole no implica asumir compromisos genéricos acerca del carácter de los vínculos humanos.

En cambio, esos mismos acuerdos procesales son insuficientes para generar aquel *nosotros* al que aludimos anteriormente, aquel nivel de vínculos y compromisos frente al cual un acto de felonía equivale a renunciar a la dignidad común de todo ciudadano, a la calidad de interlocutor válido y miembro confiable de la asociación política.

Vale la pena esclarecer un poco más este punto. Cuando ingreso a un club de bochas o me registro en un hotel, asumo un vínculo contractual en virtud del cual quedan establecidos los derechos y obligaciones de las partes: acepto regirme por ciertas reglas como contrapartida de mi *adhesión voluntaria* a esa transacción. Mi compromiso con esas reglas es acotado y estrictamente instrumental: cumplo lealmente con ellas en la medida en que el mantenimiento de ese orden funcional reglamentado me facilita el acceso a los servicios o a las condiciones requeridas para desarrollar ciertas actividades en las que estoy interesado. En todo caso, puedo agregar por mi cuenta y riesgo una carga afectiva a los vínculos humanos que allí desarrollo. Sin embargo, no puedo exigir de los demás asociados: 1) ninguna reciprocidad a mis identificaciones, ninguna corresponsabilidad por el perfil del ámbito humano que conformamos, y 2) ninguna obligación de compartir tareas, búsquedas y desafíos cuyo alcance no esté expresamente definido y establecido de antemano.

Con base en razones de este orden, resulta desmedido esperar que el mero establecimiento de reglas claras para consagrar mayorías pueda resolver el problema central de toda asociación política: *que las adhesiones resulten vinculantes para todos sus miembros*, que aquellos núcleos de ciudadanos que se oponen a los criterios sancionados de gestión puedan ser rescatados e integrados —sin dejar por el camino sus críticas y sus propuestas— como depositarios de expectativas arraigadas y de pretensiones valiosas.

Por el contrario, las reglas pueden ser “tan claras” en su determinación de triunfadores y perdedores, que estos últimos —eventualmente el 49 %— resulten sistemáticamente marginados, desautorizada su voz, su experiencia y su capacidad de hacer aportes relevantes. Esta marginación es capaz de dar lugar a una respuesta de deslealtad y desafección, traducida en múltiples formas de “salida” del sistema político y de sus compromisos.

Plantear el tema en términos de *verdad/mentira* equivale a buscar un atajo para encontrarse con ese personaje mitológico que es *la-voluntad-genuina-de-la-sociedad*. Significa también desentenderse de todas las dificultades y los dilemas que desgarran a cualquier sistema institucional basado en la opinión libre de la ciudadanía. Esas dificultades surgen, por

ejemplo, cuando nos preguntamos cómo compatibilizar exigencias opuestas, tales como la de reducir al mínimo las exclusiones de reclamos y preferencias, por un lado, y por el otro cómo evitar la dispersión de múltiples grupúsculos, dispersión que termina neutralizando y volviendo superfluo a todo el proceso. Y además, ¿cómo asumir aquellas agregaciones en torno a alternativas puntuales de adhesión y de rechazo, desconectadas de cualquier secuencia responsable y esclarecedora de esa misma opinión pública?

En realidad, ese planteo incurre en un pecado mucho peor que el mero desentenderse de las dificultades: lo que hace es reducirlas a una cuestión de *honestidad/engaño*, convertir toda la polémica sobre la reforma en un enfrentamiento entre quienes prefieren seguir medrando en la confusión y en el engaño, en el desconocimiento de la voluntad manifiesta de la ciudadanía —los antirreformistas— y los campeones de la moralidad electoral y del acatamiento a esa misma voluntad. Llevadas a ese punto las cosas, resulta imposible trabar un diálogo esclarecedor, ir más allá del intercambio de acusaciones. Para salir de ese pantano hay que empezar por reconocer las complicaciones intrínsecas del asunto y los fundamentos legítimos de las resistencias que provoca el mejor intencionado de los planteos. En cambio, hablar de *verdad electoral* supone admitir que existe *un procedimiento unívoco y transparente* de conteo y acumulación de las preferencias cívicas. Al mismo tiempo, denunciar como *mentiroso* al sistema electoral vigente implica responsabilizarlo de un sesgo distorsionador de la voluntad de la ciudadanía en beneficio de una opción de gobierno, que no sólo carecería del respaldo mayoritario sino que convocaría la mayoría de los rechazos.

Mayorías de gobierno y consensos generalizables

La insistencia unilateral en el logro de mayorías unívocas resulta entonces mala consejera. Además de quedar desguarnecida frente a las versiones totalitarias de la legitimación democrática, de dar la espalda a las complejidades a que da lugar cualquier criterio de agregación de preferencias —ambientando una interpretación burda, plebiscitaria de la configuración de voluntades políticas—, se hace culpable de una confusión mayúscula acerca de lo que está en juego.

En efecto, si la obsesión por conformar a un gobierno de mayorías se constituye en la única meta perseguible por los actores políticos, y si estos solo se autoperciben desde esa perspectiva estrecha, entonces la vida política se convierte en un registro interminable de avances y retrocesos, de flujos y reflujos, un cementerio de apuestas fracasadas de los sucesivos *proyectos* políticos, sociales o económicos. Se trata de una lectura que mide exclusivamente los resultados alcanzados en “clave yoica”, es decir, a partir de las intencionalidades —no necesariamente explicitadas— de los actores príncipes, únicos asociados imaginables del *elector y su voluntad inicial*.

Tal clave de lectura solo puede producir versiones caricaturescas de los procesos políticos, según las cuales, por ejemplo, el pueblo en su mayoría se vuelca a las calles en 1968 para festejar el fin de una época y de un régimen, para levantarse al otro día, resignado y decepcionado, a entregar su destino en manos de los Pompidou, los Giscard, los Reagan y los Thatcher. Y bien, dichas versiones —al margen de que unas apelen a conexiones sistemáticas y estructurales y otras se dejen llevar por “la espuma de los acontecimientos”— olvidan, ante todo, que lo que se dilucida en la escena pública no son meramente victorias y derrotas de proyectos y movimientos colectivos, sino *asuntos*. También dejan de lado que, por lo mismo, un movimiento como el del 68, con proyecciones mundiales, puede dejar intactos —a primera vista— los regímenes económicos y los sistemas políticos y, sin embargo, trastornar todas las premisas del debate, reformular la agenda de demandas y expectativas, volver obsoletos casi todos los recursos clásicos de legitimación de decisiones.

Asimismo, ese tipo de interpretaciones no toma en cuenta que a menudo ciertas corrientes políticas minoritarias cumplen papeles decisivos en la configuración de voluntades políticas, en la elaboración de consensos generalizables, en la reincorporación de minorías excluidas, en el otorgamiento de garantías compensatorias. Tales los casos ejemplarizantes del Partido Liberal en la República Federal de Alemania y del Partido Socialista en Italia.

Más decisivamente todavía, tales versiones desconocen que las agrupaciones políticas tienen compromisos más sustantivos que el de

ejercer cargos de gobierno o el de mantener su integridad e idiosincrasia como aspirantes a ese ejercicio. De tal manera, no pueden admitir que esas agrupaciones, en cuanto portadoras de modelos de asociación política, de interpretaciones de las condiciones y garantías exigibles de cara a una convivencia social óptima, tienen una vocación *descentrada*, no “yoica”. Su mejor aporte y el mejor premio para sus afanes —la incorporación de sus *verdades*, de su mensaje y de sus exigencias al acervo de consensos compartidos— puede coincidir con la disolución de esa corriente de opinión como actor individualizado dentro de la escena pública.

Y para que ello suceda efectivamente así, no se requiere ninguna dosis extra de desprendimiento político: salvo aquellas agrupaciones organizadas como “sectas misioneras”, que se autoperciben como “los salvadores de un mundo corrompido”, cualquier partido democrático se asume como un instrumento social provisorio y pone su mejor empeño en el *cómo* se gobierna una sociedad, en los *principios* que estructuran los vínculos y las posibilidades de ejercicio de la ciudadanía, y no en *quién* la gobierna.

IV. Algunas conclusiones provisorias

1. Las críticas reformistas al sistema electoral vigente se basan en un modelo ideal que aísla al votante y privilegia el vínculo personal entre este y su representante propio. A partir de allí se tiende a desvalorizar la trama de mediaciones y encuadramientos partidarios, llegando a visualizarlos como artilugios que distorsionan la voluntad popular y alejan a la ciudadanía del sistema político.
2. Por su parte, las propuestas reformistas de representación alternativa evidencian a menudo claros sesgos plebiscitarios. Ellos derivan inevitablemente de ese modelo contractualista del voto y expresan una voluntad de reflejar los deseos populares al margen de los encuadramientos partidarios. No se advierte el riesgo que esto implica, lo cercano que está del modelo de Bordaberry, dentro del cual no había lugar más que para

agrupaciones circunstanciales de ciudadanos. En esa línea, se podría llegar a batir todas las marcas de lo que se considera como “alta representatividad”, reduciendo al mínimo posible los votantes sin diputado, pero logrado al final personajes tan “representativos” como Cicciolina o Cacareco que, por lo general, no responden más que a un desahogo momentáneo.

3. Los planteos reformistas no han logrado desmontar las desconfianzas —algunas legítimamente motivadas— de los defensores del sistema actual y mucho menos contrarrestar sus argumentaciones, en particular las que denuncian los inconvenientes y las incongruencias de las propuestas manejadas. No se ha logrado hacer salir de “su madriguera” a los antirreformistas. Es más, los supuestos implícitos de las argumentaciones manejadas los convencen de que no vale la pena hacerlo.

Enumero sus motivos: se desconoce y se descalifica el sistema vigente, pero no se emprende el rescate de lo mejor de un legado de cultura política e institucional que resiste múltiples comparaciones y sale favorecido en la mayoría de ellas. Los reformistas parecen no hacerse cargo, tampoco, de las dificultades y exigencias ineludibles que tensan a cualquier sistema político. Se limitan, por último, a instalarse en un *nosotros* meramente procesal, incapaz de ofrecer un terreno propicio para encuentros rendidores y disposiciones vinculantes y sin exclusiones. Otro habría sido el resultado si hubieran empezado por construir un ámbito de interlocución que no ofreciera resquicios cómodos para desacoplarse y desconvocarse. Hubiera sido necesario desarmar, desde el inicio, las preveniciones injustificables de unos y de otros, poniendo en evidencia sus múltiples flancos sensibles.

4. En el caso de los “antirreformistas”, además de su muy frecuente desconocimiento acerca de las diferentes lógicas de funcionamiento de los regímenes presidencialistas y parlamentaristas, esos flancos débiles suelen radicar en el tributo que pagan por su adhesión —no argumentable a la luz de lo público— a modelos plebiscitarios de representación política, distintos a los que están implícitos en los planteos reformistas, pero no menos reñidos con las exigencias de una convivencia democrática madura.

Tal como ha quedado esbozado el panorama, mientras las filas de los reformistas se llenan de tibios, pesimistas y oportunistas, las de sus contrarios parecen fortalecerse por la debilidad de los desafíos que reciben.